



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “GESTIÓN DE UN CENTRO PARA EL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES PROTEGIDOS ATENDIDOS CON CARGO A LA DIRECCION GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD (35 PLAZAS)”.

De acuerdo con el artículo 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), al considerarse este contrato como de servicios, se procede a justificar el recurso a la gestión indirecta para su prestación.

De acuerdo con lo expuesto en la memoria justificativa de la necesidad del contrato así como en la propia descripción de las actuaciones e intervención a desarrollar, las prestaciones propias del presente contrato se consideran de carácter ordinario de la Administración competente en materia de infancia pero que deben ser prestadas por personal cualificado y con experiencia constatada para tal fin y que de cobertura a las necesidades de los menores durante su periodo de permanencia en el centro.

Conviene señalar que la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad no cuenta con personal con el perfil profesional requerido para la prestación del servicio, y ello porque entre sus funciones **no se encuentra la gestión directa de los servicios de atención social**, gestión atribuida a la Agencia Madrileña de Atención Social, de conformidad con el artículo 1.1 del Decreto 230/2015, de 20 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia Madrileña de Atención Social.

Con la extinción del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, por Decreto 72/2015, de 7 de julio, en virtud del cual se modificó la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, que tenía hasta entonces categoría de organismo autónomo y podía como tal, en virtud de su autonomía organizativa y presupuestaria, ejercer la gestión directa de los centros de adscripción, se estableció que las competencias del Instituto extinto fueran asumidas por la entonces Dirección General de la Familia y el Menor, **excepto la gestión directa de los centros titularidad del mismo que se atribuye a la Agencia Madrileña de Atención Social (artículo 5).**

De acuerdo con el artículo 1.1 del Decreto 230/2015, de 20 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia Madrileña de Atención Social, **ésta ejerce la gestión directa, el desarrollo y el control de los centros y Servicios de Asistencia Social que, siendo de titularidad de la Comunidad de Madrid, le han sido asignados** de conformidad con la normativa aplicable, **así como de los que se le asignen en el futuro**. En el anexo de este Decreto se relacionan los centros y servicios que se le asignan, entre los que se encuentran los centros de menores que antes dirigía de forma directa el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.

Se trata, por tanto, de un ente instrumental para la prestación directa del servicio público que se le encomienda, **configurándose los centros que tiene asignados como elementos operativos de la prestación de servicios**.

La adscripción de **todos los centros de gestión directa** de la Consejería de Familia, Juventud y Fomento de la Natalidad responde a una mayor facilidad para conseguir economías de escala en las contratación de obras, suministros y servicios para su gestión integral, una mayor uniformidad respecto a los procesos y un mejor control en materia de recursos humanos, pero ello no presupone una atribución competencial en la atención e intervención, en nuestro caso con los menores, lo que provoca no pocas disfunciones en la atención.

El inmueble donde se va a desarrollar el servicio es de propiedad de la Comunidad de Madrid.



Si bien, este servicio podría haber sido asumido directamente por la Administración, **a través de la Agencia Madrileña de Atención Social**, sin tener que recurrir a la iniciativa privada en este campo, en el de los servicios a las personas, se han dado las siguientes circunstancias para desistir de la gestión pública del centro:

- Por un lado, las restricciones a la contratación laboral de la Agencia Madrileña de Atención Social impuestas por las sucesivas leyes presupuestarias.
- La plantilla actual de la Subdirección General de Protección de la Infancia, que es la unidad que, dentro de la Dirección General, ejerce la protección de los menores tutelados, cuenta aproximadamente con 130 trabajadores (entre funcionarios y personal laboral), que tienen asignadas unas determinadas tareas y horarios, que impiden compaginarse con la prestación de este servicio; recuérdese que, a efectos de la prestación del servicio objeto del contrato, **siempre deben estar presentes en el recurso residencial, trabajadores durante las 24 horas del día, todos los días del año.**

En esta Subdirección General, el personal de estructura es de Administración General y el especializado son abogados, educadores, psicólogos y trabajadores sociales, que se encargan de hacer el seguimiento de los recursos de gestión indirecta, no existiendo en la Relación de Puestos de Trabajo ciertos perfiles que son claves en un centro de protección para menores

- Por otro lado, limitaciones de corte presupuestario, ya que el coste de un centro público normalmente es mayor y también la Administración tiene que enfrentarse directamente con la conflictividad laboral.

El Programa Presupuestario 232F no dispone de los créditos necesarios para acometer el incremento de plantillas que la gestión del centro requeriría ni el de otros gastos que se deberían asumir, resultando imposible el incremento presupuestario que ello requeriría.

En conclusión, conviene señalar que la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad no cuenta con personal con el citado perfil profesional ni con la infraestructura necesaria para prestar el servicio de forma directa **y ello porque entre sus funciones no se encuentra la gestión directa de los servicios de atención social, gestión atribuida, como se ha señalado con anterioridad, a la Agencia Madrileña de Atención Social**, de acuerdo con el artículo 1.1 del Decreto 230/2015, de 20 de octubre.

La puesta en marcha de un centro de gestión pública conlleva unos trámites que no concuerdan con la agilidad con la que se debe afrontar la atención de estos menores, lo que justifica el inicio de la tramitación de un contrato de servicios para el Acogimiento Residencial de menores, atendidos con cargo a esta Dirección General.

Por otra parte, el servicio se ha de seguir prestando a los usuarios del centro, por lo que no puede interrumpirse en tanto se decida una habilitación de los medios humanos y materiales que requeriría el cambio en el modelo de gestión, por lo que es preciso tramitar un contrato de servicios para su mantenimiento conforme a los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.



Teniendo en cuenta, por tanto, la normativa vigente y la necesidad de dar continuidad al acogimiento residencial de los menores que se encuentran actualmente en el centro, y dado que la Dirección General Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad no puede prestar con sus propios medios este servicio, se hace necesario ofrecer una solución ágil y duradera, recurriendo a una contratación externa para su ejecución por una entidad que desarrolle una actividad análoga a la que constituye el objeto de este contrato, dando así cumplimiento a las funciones que esta Dirección General tiene encomendadas.

En Madrid, a la fecha de la firma

**EL DIRECTOR GENERAL DE INFANICA,
FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD**

Fdo.: Alberto San Juan Llorente

